

LAS LUCHAS POR UN PACTO DEMOCRÁTICO

Las explicaciones que se han ensayado en torno a la presencia de actores armados y organizados tienen naturaleza muy variada: unos dicen que se trata de la "urbanización del conflicto armado"; es decir, del incremento de las acciones de los actores de la guerra interna en la ciudad. Otros indican que son apenas repercusiones de la lucha contra el crimen organizado. Otros señalan que el centro del problema "no es la lucha territorial entre guerrilla y paramilitares sino que la violencia tiene origen, en buena medida, en las políticas de exclusión y represión del Estado local contra las masas de pobladores pobres de las laderas de Medellín".

Lo cierto del caso es que el experimento que vivió la ciudad de políticas represivas, de mano dura, siempre fracasó, entre otras razones porque se trata de aparatos de seguridad o represivos mal informados, que desconocen las zonas, con muy poco apoyo político y muy mal servidos, pues muchos de sus agentes han sido corrompidos. Ante el fracaso se insistió, y se sigue insistiendo, bien en pactar el silencio de la armas, o bien en una política social focalizada en los más pobres. Se olvidan de la concertación como mecanismo de democratización.

Todos estos asuntos problemáticos han sido enfrentados con enfoques que han fracasado, en la medida que han sido respuestas *externas*, en donde la participación comunitaria ha sido excluida en lo técnico y discriminada en lo político¹.

En el transcurso de los últimos años, empezando con la Consejería Presidencial para Medellín, que dirigió en primera instancia María Emma Mejía², en la ciudad se han intentado varias aproximaciones en la búsqueda de soluciones al problema de violencia.

A raíz de las críticas que desde diferentes sectores de opinión ciudadana se hicieron a los pactos³ establecidos entre distintas bandas o "combos" barriales buscando la *no agresión y el respeto por la vida*, y que contaban con el apoyo de

¹ Conviene destacar que se han hecho intentos desde la misma comunidad, para enfrentar las situaciones problemáticas, basta mencionar "el plan alternativo de desarrollo de la zona nororiental o Plan Alternativo Zonal (PAZ)" presentado a consideración del Concejo Municipal y de la Alcaldía de Medellín en 1996. Igualmente mencionemos "el Plan de desarrollo participativo de la zona Noroccidental" presentado en 1990. En ambos la participación de mas de 300 organizaciones de los barrios afectados en el Plan, lo que demuestra la vitalidad e interés de la comunidad de coger en sus propias manos su destino. Ambos proyectos fueron archivados por la Administración Pública.

² Compañera de Fórmula, en la Vicepresidencia, del candidato Horacio Serpa en su lucha por la primera magistratura del país enfrentado a Andrés Pastrana. Este a la postre fue elegido Presidente del país.

³ Se trataría de una versión de "pactos sociales" o acuerdos entre grupos sociales organizados a la manera de la visión neocontractualista de John Rawls, en donde, de una parte, los grupos involucrados **llámense** bandas, combos y milicias, determinan "un armisticio razonado" que incluye el respeto por el otro, la no agresión y el respeto por la vida; y de otro lado, **aparece** la municipalidad quien avala y respalda estos acuerdos, garantiza el apoyo de seguridad y desarrolla programas de inversión pública, en particular de empleo. Según la Oficina de Asesoría de Paz y Convivencia de Medellín, se desarrollaron 25 pactos de no agresión entre diferentes bandas entre los años de 1998 y 2000

la Oficina Municipal de “Asesoría de Paz y Convivencia”⁴, surgieron voces que señalaron que una clara política y estrategia de gestión del conflicto pasaba por la idea que la paz no se compraba sino que se construía, buscando anular las desigualdades sociales. Es decir, criticaban *la política de apoyos económicos* que en últimas y en la práctica solo beneficiaban a los grupos de actores armados y no a la comunidad en general⁵. Las críticas más concretas y más delicadas que se hicieron en su momento, tuvieron que ver con la compra de armas por parte de las bandas con dinero que estaría destinado a la inversión social en barrios y con el excesivo protagonismo que tomó la Mesa de Trabajo de la Cárcel de Bellavista, que en últimas era la que establecía los términos de los pactos entre las bandas barriales.

Esto significaba que se requerían tanto el acercamiento con los actores armados, pero más importante era el apoyo institucional y ciudadano y la inversión social en aquellas zonas geográficas y de pobladores con quienes se tenía “una gran deuda social”⁶.

Definitivamente, la estrategia ha consistido en *buscar por todos los medios, disminuir los enfrentamientos violentos*. Así lo que en Medellín se ha llamado “procesos de paz” en la práctica solo han sido negociaciones realizadas por las jerarquías de las diferentes organizaciones armadas –bandas, combos, milicias y recientemente paramilitares- con los representantes del Estado y la Administración Local, tendientes a silenciar las armas. Sin desconocer la importancia de estos acuerdos, que reprimen la violencia y que considero son indispensables para resolver los asuntos de fondo, es claro que no ha habido hasta este momento un proceso continuo tendiente a cambiar las condiciones de exclusión y marginalidad, o si se quiere, de contexto, en las que viven la mayoría de pobladores en

⁴ La propuesta con la cual nace esta oficina fue la de desarrollar para los actores armados, básicamente los grupos milicianos del ELN y de las FARC un proceso de reinserción a la vida civil, con alternativas de proyectos productivos y desarrollo para las comunidades donde los actores armados operan. El primer gran experimento concluyó el 25 de Febrero de 1994, cuando 650 jóvenes –aunque se estima que esta fue una cifra inflada, para poder tener poder de negociación con la Administración Municipal- de las Milicias Populares del Pueblo y las Milicias Populares del Valle de Aburrá, que habitaban los barrios Popular I y II, La Isla, Santo Domingo y otros barrios de la Comuna Nororiental, Villa del Socorro, Moravia, La Milagrosa, Santa Cruz, parte de la zona centro-oriental, conformaron una Cooperativa de Vigilancia llamada Cooperativa de Vigilancia y Servicios Comunitarios (Coosercom). La misma que no fue acogida por otros milicianos. Muchos de quienes se acogieron a esta Cooperativa fueron asesinados, en medio de luchas intestinas, por poder, por prestigio, por las armas o por ventajas económicas, o bien, sufrieron los efectos de una campaña de exterminio.

⁵ Así no se plasmaba la idea de Rawls de construcción de convivencia social sobre la base de principios mínimos de justicia con aceptabilidad general por personas libres e iguales. Los beneficios económicos que favorecieron solo a algunos militantes de bandas, incluso fueron considerados insuficientes por estas, hasta el punto de que a finales de 2000, algunos de los firmantes de los pactos, y que fueron involucrados en programas de empleo como fue el de contratación para hacer limpieza y mantenimiento a las quebradas de Medellín, consideraron que el apoyo estatal era escaso, que el empleo ofrecido duraba poco o que no era para la totalidad de los miembros de las bandas involucradas.

⁶ Cuando se habla de deuda social, se quiere enfatizar en un sistema de intereses públicos y privados que se imbrican en beneficio de los privilegios de unos pocos y en detrimento de los más.

territorios donde los actores armados han afincado sus dominios. No ha habido modificación en las condiciones de inequidad social.

Sintetizando, podemos indicar que las respuestas que se han aplicado para enfrentar la presencia de actores violentos y organizados, en nuestra ciudad, se pueden dividir, en dos categorías:

- La “Vía Punitiva”, se reclaman acciones directas, “mano fuerte”, de castigo duro a cualquier tipo de infracción y, en consecuencia, se dirigen a aumentar el número de efectivos policiales, a criminalizar a los menores y se aumenta el número de cárceles para encerrar delincuentes.

Se ha venido creando la idea de que el mismo Estado, además de los ciudadanos corrientes, son víctimas de los violentos, por ello es necesario apoyar el Estado, incluso tolerando una situación metajurídica, para evitar el desplome total del país y de esta ciudad, ya suficientemente estigmatizada.

- De otro lado, la “Vía preventiva”, que está en oposición a la anterior, y que señala que los resultados del uso de la represión y de la fuerza son pasajeros, pero no solucionan el problema, que sólo se ha logrado equivocadamente criminalizar la pobreza, y profundizar los enfrentamientos sociales, sin cambiar los contextos. Proponen entonces un enfoque preventivo, con la participación de toda la comunidad, y las iglesias, con vigorosos programas de apoyo a los jóvenes desfavorecidos.

La experiencia vivida en la ciudad muestra que es notable el hecho de la falta de continuidad en las políticas para enfrentar la violencia, muchas sin duda bien intencionadas, pero con una escasa o mínima evaluación, y que solo han traído resultados parciales. Pero sutilmente, al mismo tiempo, se ha agravado la situación: se suaviza una coyuntura difícil, pero las raíces siguen hundiéndose más hondo. Las condiciones han cambiado y cada día aparecen elementos que no fueron considerados previamente.

Es importante señalar que la situación ha sido abordada fundamentalmente desde la perspectiva del gobierno municipal, con la importante participación de la Iglesia y algunas organizaciones sociales, pero con la mayoría de ciudadanos como espectadores no comprometidos.

Sin embargo, hoy, la estrategia que se ha venido implementado desde la misma comunidad y liderada por los sacerdotes en sus respectivas parroquias, consiste en la construcción Mesas de Trabajo Barriales, de las cuales son conocidas 21, que funcionan de forma autónoma y que buscan apoyarse para sus proyectos de reconstrucción del tejido social en la participación de maestros, madres comunitarias, directores de grupos juveniles y de la Tercera Edad, personal del sector de la salud y padres de familia.

Las *mesas de trabajo* son mecanismos propios de participación barrial, constituidas en orden de enfrentar los conflictos violentos. Parten pues de reconocer dos hechos: de un lado; que la seguridad ciudadana debe ser atendida por las Instituciones gubernamentales, y de otro lado, se reconoce la responsabilidad que cabe a la misma comunidad para intervenir directamente los procesos de desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida.

Partiendo del interrogante que a mi modo de ver es lógico y cuestiona el funcionamiento y la eficacia de estas mesas, de ¿cómo enfrentar la situación de agresión que afecta a toda la comunidad, sin pertenecer a ninguno de los grupos armados en conflicto? encuentro barreras históricas, entre las cuales se reconocen:

- Inexperiencia para trabajar de una manera coordinada, interinstitucional e intersectorialmente. Existe muchas organizaciones al interior de las comunidades, tales como grupos deportivos, culturales, acciones comunales, convites, grupos solidarios, iglesia, etc. pero trabajan por separado, generando un impacto mínimo.
- Poca habilidad en la gestión para plantear soluciones o mecanismos de intervención, sin poner en riesgo la propia integridad.
- Poco conocimiento de métodos de intervención social.

Las propuestas siguen sobre la mesa, todas se auscultan, se plantean y se discuten, pero la ciudad, pese al gran despliegue que se hace sobre el incremento del pie de fuerza –mayor número de policías- regreso a los barrios periféricos con nuevas estaciones de policía e instalación de cuarteles y los tímidos proyectos de inversión, aún se encuentra muy lejos de un verdadero proyecto de paz.

Medellín, Julio de 2003.

BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA

- Alcaldía de Medellín, (1994) MEDELLÍN EN PAZ. PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD PARA MEDELLÍN Y SU ÀREA METROPOLITANA, Municipio de Medellín.
- Castaño, José A. (2002) "Casas abandonadas: drama de los barrios en disputa", Periódico El Colombiano, Serie Conflicto Urbano, Abril 29, Medellín.
- CEHAP Y PEVAL, (1984) INVESTIGACIONES N° 6, UNAL , Medellín
- Centro de estudios de Opinión, CEO (1985) EL MEDELLÍN QUE YO QUIERO, Ed. Concejo de Medellín.
- CEPAL (1985) LA POBREZA EN AMERICA LATINA: DIMENSIONES Y POLÍTICAS, Santiago de Chile.
- Giraldo, Carlos A. (2002) "Guerra en la Ciudad", Periódico El Colombiano, Serie Conflicto Urbano, Abril 28, Medellín.
- Giraldo, Carlos A. (2002) "Me tocó pagarles hasta \$ 5 millones", Periódico El Colombiano, Serie Conflicto Urbano, Octubre 20, Medellín.
- Giraldo, Carlos A. (2002) "Guerra Urbana no ha prosperado", Periódico el Colombiano, Serie Conflicto Urbano, Mayo 2, Medellín.
- Hopenhayn, Martín (1990) "Conflicto y violencia: Pantalla sobre un horizonte difuso" en Bejarano, Jesús (compilador), CONSTRUIR LA PAZ, Bogotá: CEREC.
- Jaramillo, Ana María (1994) ENTRE LA GUERRA Y LA PAZ. MILICIAS POPULARES EN MEDELLÍN, Ed. Región, Medellín.
- Lomnitz, Larissa (2002) "Redes sociales y estructura urbana en América Latina" en León, Miguel (coord..) MOTIVOS DE LA ANTROPOLOGÍA AMERICANISTA: INDAGACIONES EN LA DIFERENCIA, UNAM, México.
- Naranjo Gloria (1992) MEDELLÍN EN ZONAS, Ed. Corporación Región, Medellín.
- Patrialibre.org (2002) "Medellín heridas de ciudad" Periódico El Colombiano, Serie Conflicto Urbano, Medellín.
- Pecaut Daniel (1997)"Pasado y presente de la violencia en Colombia" en Revista de ANÁLISIS POLÍTICO, Ed. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá

- Periódico El Colombiano (2003) “El ELN admite freno en accionar urbano”, Junio 6, Medellín.
- Periódico El Mundo, (1981) “Medellín una ciudad joven con problemas complejos” 29 de mayo, Medellín.
- Romero, José Luis (1976) LATINOAMÉRICA: LAS CIUDADES Y LAS IDEAS, Ed. Siglo XXI, México.
- Salazar, Alonso (1990) NO NACIMOS PA´SEMILLA, Ed. Región, Medellín.
- Salazar, Alonso y Jaramillo, Ana María (1992) LAS SUBCULTURAS DEL NARCOTRÁFICO, Ed. Cinep, Santafé de Bogotá.
- Salazar P., Robinson (2003) “La violencia en los sujetos desgajados e insumisos en América Latina”.
- Sánchez Gonzalo –coordinador (1987) Ed. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
- Silva, Armando (1992) IMAGINARIOS URBANOS. CULTURA Y COMUNICACIÓN URBANA EN AMÉRICA LATINA, Tercer Mundo Editores, Bogotá.
- Useche A. Oscar, (1999) “Coordenadas para trazar un mapa de la violencia urbana en Colombia” en Revista NOVA & VETERA, ESAP, Santafé de Bogotá.
- Yarce Elizabeth (2002) “Medellín, 20 años de llanto en las calles” Periódico El Colombiano, Serie Conflicto Urbano, Abril 30, Medellín.
- Zuluaga, Víctor León, (2002) “Desorden urbano y narcotráfico; Piezas del rompecabezas”, Periódico El Colombiano, Noviembre 29, Medellín.